



Normatividad de referencia para el desarrollo de la actividad Agropecuaria y rural



¿Sabías que... el campo colombiano también tiene sus propias reglas?

El documento Normatividad de referencia para el desarrollo de la actividad agropecuaria y rural reúne las principales normas que orientan a productores, empresarios e intermediarios financieros al estructurar o financiar proyectos rurales en Colombia.

Su propósito es ofrecer una guía clara sobre el marco legal que respalda un desarrollo productivo responsable, complementario al Manual de Servicios de FINAGRO.



1



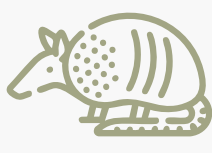
En el campo, los niños tienen derecho a crecer y a desarrollarse plenamente: Trabajo infantil

En Colombia está prohibido emplear menores de 18 años en actividades que afecten su salud, educación o desarrollo integral.

Las Leyes 704 de 2001 y 1098 de 2006 establecen que solo adolescentes de 15 a 17 años, con autorización especial, pueden trabajar en actividades seguras. El control está a cargo del Ministerio de Trabajo y el ICBF.



2

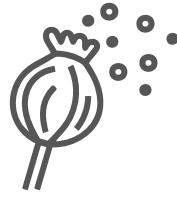


El control del comercio protege las especies: Comercio de fauna y flora silvestre

El uso o comercio de especies silvestres se regula mediante la **Convención CITES** (por sus siglas en inglés de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), adoptada por Colombia con las **Leyes 17 de 1981 y 807 de 2003**. Protege especies amenazadas y restringe su comercialización. Su implementación corresponde al **Ministerio de Ambiente, la Cancillería y el Instituto Humboldt**.



3



No todo lo que crece se puede sembrar: Cultivos ilícitos

La **Ley 30 de 1986** prohíbe los cultivos de coca, amapola y marihuana con fines no médicos o científicos. Las actividades agropecuarias deben excluir cualquier cultivo o producto derivado con potencial de generar dependencia.



4



Zonas que se protegen para mantener el equilibrio ambiental: Ecosistemas estratégicos y áreas protegidas

Los ecosistemas como páramos, humedales, bosques o nacimientos de agua solo permiten actividades de bajo impacto ambiental.

La regulación se apoya en la **Ley 99 de 1993**, el **Decreto 1076 de 2015** y la **Ley 1930 de 2018**.

Las autoridades competentes son el MADS, las CAR y Parques Nacionales Naturales. Las categorías de protección incluyen: parques, reservas forestales y áreas privadas de conservación.



5



Un límite entre la productividad y la conservación: Frontera agrícola

En la **Resolución 261 de 2018** del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se delimita el territorio donde pueden desarrollarse actividades agropecuarias, separando las áreas productivas de las zonas protegidas o de especial importancia ecológica.



6



El diálogo con las comunidades fortalece las decisiones: Consulta previa

Es un derecho fundamental de los pueblos indígenas y afrodescendientes cuando se proyectan obras o actividades que puedan afectar sus territorios.

Regulada por la **Ley 99 de 1993**, la **Ley 70 de 1993** y el **Convenio 169 de la OIT**, garantiza su participación informada y la protección de su integridad cultural, social y económica.



7



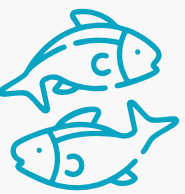
Control, prevención y calidad en el sector agropecuario: Funciones del ICA

El **Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)** es la autoridad en sanidad animal y vegetal. Controla el uso de insumos, semillas y material genético, otorga permisos de importación y exportación, regula viveros y actividades pesqueras, y certifica la calidad sanitaria de las exportaciones.

Su estructura está definida en el **Decreto 4765 de 2008**.



8



Equilibrio entre producción y conservación en los ecosistemas acuáticos: Actividad pesquera y acuícola

El **Decreto 1835 de 2021** regula la pesca y la acuicultura bajo un enfoque ecosistémico que integra sostenibilidad ambiental y desarrollo económico.

La **AUNAP** es la autoridad encargada de otorgar permisos, realizar seguimiento y promover el uso responsable de los recursos acuáticos.



9



La ley protege la naturaleza: Delitos ambientales

El **Título XI del Código Penal (Ley 599 de 2000)**, fortalecido por la **Ley 2111 de 2021**, establece sanciones penales para quienes afecten el medio ambiente mediante **deforestación, contaminación, tráfico ilegal de fauna o flora y uso indebido de recursos naturales**.

Las penas incluyen cárcel, multas y decomiso de bienes, reflejando el **compromiso del país con la protección y sostenibilidad de sus ecosistemas**.